

ECUADOR Debate

CONSEJO EDITORIAL

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira,
Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga,
Fredy Rivera Vélez, Marco Romero.

Director: Francisco Rhon Dávila. Director Ejecutivo del CAAP
Primer Director: José Sánchez Parga. 1982-1991
Editor: Fredy Rivera Vélez
Asistente General: Margarita Guachamín

REVISTA ESPECIALIZADA EN CIENCIAS SOCIALES

Publicación periódica que aparece tres veces al año. Los artículos y estudios impresos son canalizados a través de la Dirección y de los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones, comentarios y análisis expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

© ECUADOR DEBATE. CENTRO ANDINO DE ACCION POPULAR

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$ 30

ECUADOR: US\$ 9

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$. 12

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR US\$ 3

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-173B, Quito-Ecuador

Telf: 2522763 . Fax: (5932) 2568452

E-mail: caap1@caap.org.ec

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

PORTADA

PuntoyMagenta

DIAGRAMACION

Martha Vinueza

IMPRESION

Albazu Offset



ISSN-1012-1498

Quito-Ecuador, diciembre del 2006

PRESENTACION /

COYUNTURA

La victoria de Rafael Correa y la ola progresista en América del Sur / 7-18
Hernán Ibarra

El enigma del voto étnico o las tribulaciones del movimiento indígena:
Reflexiones sobre los resultados de la primera vuelta electoral (2006)
en las provincias de la sierra / 19-36

Sara Báez Rivera y Víctor Bretón Solo de Zaldívar

Escenificaciones, redes y discursos en la segunda vuelta electoral / 37-50
Carlos de la Torre

Conflictividad socio-política / 51-56
Julio- Octubre 2006

TEMA CENTRAL

La crisis del clientelismo en Ecuador / 57-76
Pablo Ospina Peralta

Relecturas de la noción de clientelismo: una forma diversificada
de intermediación política y social / 77-102
Emmanuelle Barozet

El Clientelismo político como intercambio / 103-148
Susana Corzo Fernández

La Política del Don en la ruralidad Peruana / 149-160
Ladislao Landa Vásquez

DEBATE AGRARIO

La investigación Agroecológica: ¿Puede contribuir a la disminución
de los impactos ambientales? / 161-166

Susana Alvarez y Teodoro Bustamante

Desplazamiento poblacional y seguridad humana:
el caso de Carchi e Imbabura / 167-186

Tanya Korovkin y Zulinda Hernández

ANÁLISIS

De la intransigencia a la conciliación: el aprendizaje político del movimiento obrero ecuatoriano / 187-204

Takahiro Miyachi

La responsabilidad de proteger elementos para el desarrollo de una posición ecuatoriana / 205-220

Arturo Cabrera Hidalgo

Inicios de la Modernidad en América ¿Civilización o Barbarie? / 221-230

Pedro L. Basulto Ramírez

Desplazamiento poblacional y seguridad humana: el caso de Carchi e Imbabura¹

Tanya Korovkin*

Zulinda Hernández**

El crecimiento en los niveles del conflicto colombiano a partir de la implementación del Plan Colombia ha resultado en el desplazamiento de miles de ciudadanos colombianos al territorio ecuatoriano. En estudios internacionales, el desplazamiento poblacional en áreas cercanas a las zonas de guerra se ha conceptualizado tradicionalmente como un problema netamente humanitario, siendo los refugiados sujetos de atención por parte de los organismos internacionales. En los últimos años, esta visión humanitaria ha sido matizada por las consideraciones de la seguridad del estado: ahora los flujos de refugiados son vistos no solamente como la consecuencia de conflictos armados sino también como una posible causa de la inestabilidad nacional y regional.

En este estudio, hemos optado por una tercera perspectiva, la de seguridad humana. Es un concepto nuevo, que da prioridad a la seguridad física de personas y el desarrollo participativo y democrático de las comunidades locales. En esta ponencia, intentaremos desarrollar un marco conceptual para el análisis del desplazamiento poblacional dentro de esta ópti-

ca, dando prioridad al análisis de la situación local y a la problemática económica y social. Nuestro enfoque geográfico son provincias de Carchi e Imbabura, las que junto con Esmeraldas y Sucumbíos forman parte de lo que se llama la Zona Norte. Es un estudio de carácter preliminar: su objetivo principal es generar debate y contribuir al desarrollo de futuras investigaciones.

1 Este estudio forma parte de un proyecto auspiciado por la Universidad de Waterloo y el Fondo de Pequeños Proyectos del Consejo Canadiense para los Estudios en Ciencias Sociales y Humanidades (SSHRC). El trabajo de campo en Carchi e Imbabura fue realizado en septiembre-noviembre de 2005.

* Universidad de Waterloo, Canadá

** CIDECO

Desplazamiento poblacional

Los desplazamientos poblacionales han sido un rasgo permanente de la historia humana, pero en las últimas décadas han crecido en una forma significativa, debido a varios factores. Por un lado, los procesos de globalización han destruido oportunidades económicas a nivel local y ha aumentado las posibilidades del traslado a otro país o continente, como en el caso de la migración económica de Ecuador a España. Por otro lado, la proliferación de conflictos armados ha creado un problema del desplazamiento forzado, como es el caso del desplazamiento poblacional de las áreas del conflicto armado en Colombia, uno de los temas principales de este estudio. La situación se complica por el hecho de que los países de Europa y Norteamérica están cada vez menos dispuestos para aceptar nuevos migrantes y refugiados (Newman 2003). En el caso de los refugiados, utilizan una estrategia de contención, lo que pone la responsabilidad principal sobre los países periféricos cercanos a las áreas de conflicto, en su mayoría pobres y poco preparados para controlar y atender los flujos de refugiados. De hecho, muchos de estos países tienen lo que se podría llamar "fronteras porosas," con las poblaciones a ambos lados de la frontera, unidas por los lazos de etnia y parentesco, pasando de un territorio a otro de acuerdo con sus necesidades de sobrevivencia.

La falta de recursos y la porosidad de fronteras se combina con la falta de claridad con respecto a quienes son los refugiados. Primero, es prácticamente imposible separar la migración econó-

mica del desplazamiento forzado. Muchas personas que se consideran por las autoridades nacionales e internacionales como los migrantes económicos que no merecen el estatus del/la refugiado/a en realidad también huyen de la guerra. Segundo, la definición internacional del refugiado sigue las pautas de la Convención de Ginebra de 1951. En los tiempos de la Guerra Fría, esta Convención había facilitado la entrada de refugiados del bloque Soviético. Sin embargo, no permite otorgar el estatus del refugiado a los desplazados de guerra dentro de las fronteras nacionales o a los que cruzan fronteras huyendo de la violencia generalizada, la que genera los mayores flujos poblacionales en los países periféricos en nuestra época. En 1984, varios países latinoamericanos, Ecuador incluido, suscribieron el Acuerdo de Cartagena, que reconoce como refugiados a los que huyen de la violencia generalizada. Pero, a diferencia de la Convención de Ginebra, este acuerdo no tiene la fuerza de ley internacional (Gottwald 2004). Esta combinación de factores resulta en una situación donde solamente una pequeña minoría de los desplazados por conflictos armados están atendidos, como los "refugiados legítimos," por las instituciones internacionales. La gran mayoría pasan desapercibidos y desatendidos, obligados a defenderse por su cuenta, sea como sea.

La situación ambigua de los desplazados evoca respuestas institucionales igualmente ambiguas. Generalmente, el problema de los refugiados se identifica como un problema humanitario. Es una visión tradicional, especialmente típica de los círculos humanitarios internacionales representados por ACNUR y sus

colaboradores no-gubernamentales. De hecho, en el caso de los desplazados, se trata de sectores altamente vulnerables, que necesitan tanto protección y asistencia económica inmediata, como de una integración con las comunidades receptoras o un asilo en los terceros países. Pero en las últimas décadas, el desplazamiento poblacional también ha empezado a verse como una amenaza en términos de la estabilidad nacional y regional. Esta percepción es especialmente común en los países de África y Asia, donde los desplazados a menudo buscan refugio en los campos de refugiados, los cuales en algunos casos se transforman en focos de resistencia armada (Schmeidle 2002). Esta situación no existe en América Latina, pero también aquí hay una cierta reticencia para atender a los refugiados, tanto por parte de los gobiernos, como por parte de amplios sectores populares. De hecho, al cruzar las fronteras e ingresar al territorio de otros países, la población desplazada está creando una nueva dinámica social, transformándose a veces en objeto de xenofobia. La así llamada Escuela de Copenhague argumenta que los flujos poblacionales, masivos y poco controlados, pueden representar una amenaza a la identidad cultural y/o nacional de las poblaciones locales (Wæver et al. 1993). Su enfoque geográfico es la Unión Europea, donde los flujos migratorios de las últimas décadas han trastornado la inviable realidad de una estable sociedad de consumo. La situación es algo diferente en los países periféricos, los que han sufrido graves problemas económicos y sociales incluso antes de la ola del desplazamiento poblacional. En estos casos no se trata tan-

to de la amenaza a la identidad local, sino más bien de una crisis compartida por la población desplazada y la local, una crisis que puede generar tanto actitudes de resentimiento como prácticas de cooperación.

Seguridad humana

Y aquí llegamos al punto clave de este estudio: el concepto de seguridad humana. En la escuela realista, el concepto de seguridad está asociado con el uso de la fuerza para defender la integridad y los intereses del estado-nación. Últimamente, sin embargo, se ha sugerido que el uso de la fuerza en aras de la seguridad del estado, puede, de hecho, crear nuevas inseguridades para los ciudadanos (Cheeseman 2005). Como una alternativa (o como un complemento para el enfoque tradicional), se ha propuesto el concepto de seguridad humana, el cual se enfoca en la problemática social y humana, más que en el uso de la fuerza, y se refiere además a la seguridad de personas y comunidades locales, a diferencia de la seguridad del estado-nación (Buzan 1991; Buzan et al. 1998; Stoett 1999).

Es un concepto que ha provocado muchas críticas. Desde cuestionamientos en términos etimológicos porque, para algunos autores, suena contradictorio: la palabra "seguridad" evoca las imágenes de la guerra, mientras la palabra "humana" se asocia con las nociones de desarrollo humano y derechos humanos (Suhrke 2003). También porque es un concepto ambiguo. Se presta para varias interpretaciones y parece tener más valor normativo que analítico (París 2001). Hay que recordar, sin em-

bargo, que la palabra "seguridad" nos lleva a pensar no solamente sobre la guerra, sino también sobre la seguridad social y la seguridad del empleo. En cuanto a los problemas analíticos, "democracia" o "justicia" son otros conceptos ambiguos con una fuerte connotación normativa, pero no se le ocurre a nadie el purgarlos del análisis social. De la misma manera, el concepto de seguridad humana nos parece importante porque llama nuestra atención a una problemática poco analizada, pero sumamente importante: las consecuencias de conflictos armados para la población civil, tanto los desplazados como la población local.

Sin embargo, las dificultades de definición e interpretación son dificultades reales. Podemos identificar, grosso modo, por lo menos dos tendencias en este sentido. Por un lado, están los gobiernos de Canadá y Noruega, los cuales ven el concepto de seguridad humana en términos del humanitarismo internacionalista. Su enfoque está principalmente sobre la acción humanitaria y la protección de derechos humanos en un contexto de guerra. En esta óptica, la seguridad humana está asociada con atención internacional a los refugiados, con iniciativas multilaterales como el Acuerdo sobre la Prohibición de las Minas Antipersonales y con la creación de la Corte Penal Internacional. Los actores principales, desde este punto de vista, son organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no-gubernamentales (Axworthy 2004).

La búsqueda de soluciones internacionales a problemas humanitarios nos parece saludable, aunque hay que reconocer que existe una tensión entre la ló-

gica de acción internacional y una reafirmación del principio de la soberanía nacional. Esta reafirmación viene, con frecuencia, de los países periféricos, los que generalmente son un objeto (más que el sujeto) de la acción internacional. Cómo reconciliar los principios del humanitarismo internacionalista con el protagonismo de los actores nacionales es un gran desafío para los que apoyan esta versión del concepto de seguridad humana.

La segunda tendencia, tal vez más compatible con las ideas de soberanía nacional y protagonismo local, está asociada con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). En esta versión, la noción de seguridad humana tiene que ver con los problemas de pobreza y falta de participación. Para Thomas (2002: 115), por ejemplo,

... la seguridad humana se refiere a una situación en la cual las necesidades básicas están satisfechas y en la cual la dignidad humana, incluyendo la participación en la vida de la comunidad, es un hecho. Seguridad humana tiene afinidad con el concepto de una democracia activa y sustantiva, una democracia que ofrece a todos los ciudadanos una oportunidad de participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas.

En esta óptica, el eje central de la seguridad humana es el desarrollo social y económico en un contexto de democracia, mientras sus agentes principales son gobiernos locales nacionales junto con las organizaciones sociales. Pero el de las necesidades básicas, de las cuales habla Thomas, también es un concepto amplio. Incluye seguridad ali-

mentaria, vivienda, acceso a salud y educación, pero además incluye la seguridad física de las personas. Esta última adquiere una especial importancia en áreas cercanas a las zonas de conflicto armado y en áreas con altos niveles de crimen y delincuencia (Kina y Murray 2002; Owen 2002).

La preocupación con la seguridad física de la población diferencia el concepto de seguridad humana de las ideas más generales del desarrollo participativo y nos hace retomar ciertos elementos de los conceptos tradicionales de la seguridad del estado. En el caso de América Latina, esta preocupación dio lugar a las ideas de seguridad ciudadana, una forma de seguridad que presupone una colaboración entre la ciudadanía y las fuerzas del orden público (FLACSO 2004). Dado el aumento de violencia en las últimas décadas, esta colaboración parece natural y urgente. Pero es un terreno lleno de trampas. No es fácil encontrar el camino medio entre la lógica participativa de las comunidades y gobiernos locales, por un lado, y las estructuras jerárquicas de la policía y las fuerzas armadas, por el otro. Cómo asegurar el desarrollo participativo y, al mismo tiempo, proteger a las personas y comunidades contra la violencia es otro gran desafío para los que apoyan el concepto de seguridad humana.

Sintetizando las dos perspectivas sobre este concepto, podemos decir que la seguridad humana es el producto del desarrollo participativo —guiado por el gobierno democrático nacional y apoyado por la comunidad internacional— en áreas cercanas a las zonas de conflicto armado. El objetivo de este desarrollo es asegurar la integridad física y mejorar

la posición económica y social tanto de la población desplazada como de la local, con miras a la construcción regional de la paz.

Usando esta definición como el punto de partida para un estudio de la problemática de seguridad humana en Carchi e Imbabura, podemos identificar dos áreas de análisis: (i) el desplazamiento poblacional y respuestas humanitarias; (ii) la situación económica/social y acciones de desarrollo.

Desplazamiento poblacional e iniciativas humanitarias en Carchi e Imbabura

Hay dos flujos poblacionales que van desde el sur de Colombia al norte de Ecuador, y no es siempre fácil separar uno del otro. La migración económica es la más antigua, y ha aumentado debido a la dolarización de la economía ecuatoriana. Los migrantes económicos son, en su mayoría, trabajadores agrícolas que vienen a laborar en las cosechas; también hay muchas personas que se dedican al trabajo en la construcción, pequeño comercio y quehaceres domésticos. El otro flujo son los desplazados por el conflicto armado. Este flujo se ha incrementado a partir del Plan Colombia, seguido por el Plan Patriota. En 2004, el total de los desplazados colombianos llegó a 3 millones. Entre 300 mil y un millón de ellos han cruzado las fronteras para ingresar a países vecinos: Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú, y Panamá (Gottwald 2004: 517). Así, la coincidencia de la dolarización de la economía ecuatoriana con el Plan Colombia incide en el movimiento poblacional colombo-ecuatoriano. A nivel nacional, solo en cuatro años, de 2000

a 2004, el número de las solicitudes de refugio fue superior en casi 60 veces, pasando de 475 a 29,574 (ACNUR 2004: 4). El número de residentes colombianos en Ecuador también es mayor, aunque no hemos encontrado datos exactos sobre los cambios en este sentido. El Censo de 2001 indica la presencia de 52 mil personas de nacionalidad colombiana; 42 por ciento de ellos, en la provincia de Pichincha. Por otro lado, el Canciller de la República declaró, que en el 2003, había aproximadamente 250 mil colombianos viviendo en Ecuador, la mayoría en situación irregular (citados en Camacho 2004: 38).

La gran mayoría de los migrantes y desplazados entran al territorio ecuatoriano por tiempos cortos. Muchos se asientan temporalmente cerca de la frontera, para regresar después a su país. En el 2004, el Departamento de Migración en Rumichaca, registró 115 mil ingresos y 83 mil salidas. En otras palabras, el flujo neto del movimiento poblacional este año fue alrededor de 30 mil personas, aproximadamente una cuarta parte del flujo de los ingresados. Además, la mayoría de los que quieren quedarse en el país no se mantienen cerca de la frontera, sino que siguen hacia la provincia de Pichincha. En Carchi, por ejemplo, la población residente colombiana en el 2004 era alrededor de 3,000 personas, solamente 2 por ciento de la población provincial. Sin embargo, estas cifras, igual que las estadísticas nacionales, pueden ser nada más que la punta de un iceberg. Solo en la provincia de Carchi existen por lo menos 22 pasos ilegales, que pueden ser usados para cruzar la frontera (Gobierno Provincial de Carchi, 2005: 21-23). De

acuerdo a algunos de nuestros entrevistados, por cada persona que entra en forma legal, hay tres que entran indocumentados.

La actitud del gobierno ecuatoriano frente a los desplazados y migrantes colombianos es bastante ambigua. Ecuador, junto con Colombia y otros países andinos, ha firmado la Declaración de Cartagena, con su definición amplia del refugiado. Además, en 1992 Ecuador aprobó una legislación nacional que combina la definición del refugiado de la Convención de Ginebra con la de los Acuerdos de Cartagena (Huellas 2004: 4). Según el personal humanitario entrevistado, los ciudadanos colombianos pueden solicitar el estatus del refugiado si ellos sienten que su vida en el territorio colombiano está amenazada por las siguientes prácticas: (i) las amenazas de muerte debido a la colaboración (o no colaboración) con los grupos armados, (ii) el reclutamiento forzoso de niños/as y jóvenes menores de 18 años; (iii) enfrentamientos armados en el territorio donde viven. Según Gottwald (2004: 531), de los cinco países que tienen frontera con Colombia, Ecuador es el que está más abierto para acoger a los refugiados. Por lo menos, así fue al principio. Con el transcurso del tiempo, Ecuador también empezó a usar prácticas restrictivas, diseñadas para reducir el flujo poblacional del país vecino. Una de las medidas drásticas fue el requerimiento del certificado de antecedentes judiciales ("pasado judicial") para entrar a Ecuador. El objetivo proclamado fue prevenir la entrada de delincuentes y criminales colombianos al territorio ecuatoriano. Hasta que punto esta medida sirvió a su objetivo (dada la

abundancia de pasos fronterizos ilegales), no está claro. Pero, al mismo tiempo, el requerimiento del pasado judicial se ha transformado en un obstáculo para la entrada legal de mucha gente sin antecedentes judiciales, los cuales han tenido que huir de las zonas de conflicto armado sin poder hacer trámites para obtener este documento.

De una forma u otra, la introducción del “pasado judicial,” junto con otras medidas restrictivas, ha resultado en una caída del número de aceptaciones de solicitudes de refugio otorgadas por ACNUR y el gobierno nacional. No tenemos datos para Imbabura y Carchi, pero a nivel nacional, en el 2000, la gran mayoría de solicitudes de refugio (390 de 475) han sido aceptadas. En el 2004, solo 9 mil de casi 30 mil solicitudes han sido aceptadas (UNHRC 2004: 3). Al mismo tiempo, el gobierno ecuatoriano subió el costo de las visas económicas, tanto las visas de inversionistas (que subieron de 2 a 30 mil dólares) como las más baratas de amparo para los que tienen parientes ecuatorianos (que subieron de 130 a 270 dólares).

Es probable que éstas y otras políticas hayan limitado un crecimiento mucho más rápido del flujo poblacional *registrado* de Colombia a Ecuador. Pero al mismo tiempo han aportado al crecimiento de la población indocumentada, que se encuentra en una situación sumamente difícil. Mientras los refugiados y migrantes formalizados tienen el permiso de trabajo, los solicitantes de refugio, los rechazados y los que no tienen recursos para pagar la visa se encuentran en una situación altamente vulnerable: deben sostenerse a sí mismos y a sus familias pero; no tienen permiso de

trabajo y confrontan el riesgo de deportación.

El desplazamiento masivo de la población colombiana a partir del Plan Colombia ha generado varias respuestas a nivel nacional e internacional. En el 2000, ACNUR abrió oficinas en Quito, Ibarra y Lago Agrio, para atender a los refugiados, principalmente en las áreas de protección e integración (también reubica algunos refugiados en terceros países, aunque en una escala muy limitada). En todos estos casos, trabaja a través de las contrapartes ecuatorianas. De hecho, son las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana, como las pastorales migratorias y ONGs, las que desarrollan la mayor parte de actividades para los desplazados, por contrato con ACNUR o de una forma autónoma.

El trabajo de las pastorales migratorias — en gran parte, autónomo — ha sido particularmente importante. Cuando comenzó el Plan Colombia, las pastorales de cuatro jurisdicciones colombianas e igual número de ecuatorianas, situadas en la frontera, formaron la Pastoral Fronteriza, con el objetivo de implementar una “alerta temprana” sobre el desplazamiento poblacional. Las pastorales ecuatorianas desarrollan planes de contingencia y ofrecen una asistencia inmediata, tanto material como psicológica y legal, a los desplazados. También proveen de capacitación en normas de respeto, organización y derechos humanos. La Pastoral Migratoria de Carchi también tiene relaciones cercanas con las asociaciones de colombianos, las cuales se empezaron a formar antes de la llegada de ACNUR llegando a formar parte de la sociedad civil a nivel local. La mayoría de estas

asociaciones se encuentran en las zonas rurales, donde los procesos organizativos se ven facilitados por la herencia cultural comunitario-campesina. Ayudan a sus miembros y sus familias a conseguir la documentación; también apoyan con el transporte y los trámites de legalización. Los vínculos entre la Pastoral y las asociaciones de colombianos eran especialmente fuertes antes del inicio del desplazamiento masivo y la instalación de ACNUR. Así, en 1998-1999, la Pastoral de Carchi empezó a implementar un programa de documentación, capacitación, formación de líderes y desarrollo organizativo para la población colombiana, en coordinación con las asociaciones de colombianos. Este programa, que puede considerarse como un ejemplo de la acción humanitaria protagonizada por las organizaciones sociales, concluyó en el año 2000, cuando la Pastoral comenzó a trabajar con ACNUR en los programas de refugiados.

En el caso de las actividades de integración, ACNUR trabaja tanto con las pastorales migratorias como con la FAS (Fundación Ambiente y Sociedad). Hay que mencionar que la mayoría de la población desplazada en las zonas rurales se integra con la población ecuatoriana sin mucha dificultad, a través de las redes de parentesco y las asociaciones formales. Incluso así, en muchos casos, se necesitan programas de integración para ayudar a la población desplazada a superar las barreras culturales y económicas que las separa de la población local. Las pastorales migratorias desarrollan estos programas, a menudo, por su propia cuenta, recibiendo fondos de un gran número de actores institucionales,

incluyendo ACNUR. La Pastoral Migratoria de Ibarra, tiene una guardería para los hijos de los desplazados, apoya la matriculación de los niños colombianos, organiza capacitaciones para estudiantes y maestros, dona equipos, organiza talleres ocupacionales (bordado, sacos de lana, electricidad, computación), etc. A diferencia de ACNUR, que trabaja únicamente con los refugiados y los solicitantes de refugio, la Pastoral Migratoria ofrece apoyo a toda la población colombiana que lo necesita.

Si las pastorales migratorias mantienen bastante autonomía frente a ACNUR, las relaciones entre FAS y ACNUR son más estrechas. De hecho, FAS se integró al trabajo con los desplazados a partir de la llegada de ACNUR y, en el caso de Imbabura, administra la mayoría de sus programas de integración. Estos programas están dirigidos a las "comunidades receptoras," principalmente, barrios urbanos o semi-urbanos con una proporción de la población colombiana de por lo menos 5 por ciento. Incluyen tres tipos de actividades: actividades culturales y de sensibilización (e.g., caravanas culturales); apoyo para los servicios básicos, principalmente a través de la donación de equipos a los centros educativos y de salud que atienden a los niños y familias colombianas; microcrédito a través de las cajas comunitarias. ACNUR y FAS de Ibarra, por ejemplo, han apoyado colegios y centros de salud en Ibarra y Lita. En el caso de Lita, también trabajan, a través de un programa de microcrédito, con un grupo de mujeres colombianas y ecuatorianas, que elaboran productos de fibra de cabuya.

Los programas de microcrédito son, tal vez, los más importantes desde el punto de vista de los desplazados, quienes necesitan desesperadamente una fuente de ingreso. Pero, desafortunadamente, están fuera del alcance de la gran mayoría de los desplazados. Hay por lo menos dos razones para eso. Primero, los programas de microcrédito están dirigidos únicamente a los refugiados y los solicitantes de refugios, mientras la mayoría de los desplazados no caen en estas categorías. Segundo, son de corto plazo (de 6 meses a un año), mientras la mayoría de los desplazados se quedan en Ecuador por un tiempo indefinido.

Muchos de nuestros entrevistados estaban de acuerdo de que existe una fuerte necesidad de legalizar la situación de la población colombiana indocumentada, para que pueda participar tanto en el mercado de trabajo como en las actividades de los organismos internacionales. Lo que no está claro es como conseguir este objetivo. Otro reto para el ACNUR es incorporarse en una forma más plena en la vida social y política a nivel local. Se ha dado ciertos pasos en esta dirección. FAS, por ejemplo, ha intentado desarrollar relaciones más estrechas con las organizaciones barriales e involucrar sus programas de integración con los planes de desarrollo de barrios y parroquias. De hecho, el éxito de los programas de ACNUR depende, en gran parte, de su capacidad de adaptarse a las particularidades del desplazamiento poblacional colombiano-ecuatoriano, con su alta proporción de los indocumentados e integrarse al trabajo de las organizaciones sociales y los gobiernos locales.

Crisis económica/social e iniciativas de desarrollo en Carchi e Imbabura

El desplazamiento poblacional, provocado por el Plan Colombia, ocurrió en una época cuando las economías locales de Carchi e Imbabura entraron en un período de serias dificultades. Las dos provincias tienen altos índices de pobreza. Lo más probable es que estos índices se han aumentado últimamente, a la par con los índices de pobreza a nivel nacional. En 1999, más del 80 por ciento de la población rural y casi el 40 por ciento de la urbana vivían en condiciones de pobreza (Larrea Maldonado 2004; INEC y Larrea, citados en Camacho 2004: 22). La alta incidencia de la pobreza es, en gran parte, producto del bajo desarrollo productivo. En ambas provincias, los sectores principales de la economía son agricultura y servicios. Ambas cuentan con impresionantes recursos turísticos y tienen la intención de desarrollarlo (Gobierno Provincia de Imbabura 2002; Gobierno Provincial de Carchi 2005). Sin embargo, no está claro si el sector turístico puede prosperar en un ambiente de pobreza y violencia que ha llegado a caracterizar estas dos provincias.

La agricultura campesina en Carchi e Imbabura ha entrado en crisis, debido a varios factores, como la presión demográfica sobre la tierra, la falta de crédito y, en el contexto de libre comercio, la competencia con productos colombianos. El resultado es una masiva migración del campo a la ciudad, con una proporción cada vez mayor del ingreso familiar proveniente del trabajo asalariado y el pequeño comercio. En cuanto a los grandes productores agrícolas, la

dolarización ha obligado a algunos de ellos a mejorar su competitividad, pero muchos han quebrado, debido al encarecimiento de los costos de producción. Aparentemente, los sectores más prometedores son los cultivos de exportación no-tradicionales intensivos en mano de obra (espárrago, alcachofa, brócoli), pero el desarrollo en estos rubros tiene varias limitaciones. Primero, Carchi e Imbabura tienen una infraestructura productiva insuficiente. Solo el 5 por ciento de su superficie tiene la infraestructura de riego, indispensable para la mayoría de estos cultivos. Los indicadores de red vial, electrificación y telefonía también están por debajo de los promedios nacionales (Ramón Valarezo y Torres Dávila 2004: 31-32).

Sin embargo, la falta de infraestructura no es el único cuello de botella. El crédito es escaso y caro, como en el resto del país. Además, se ha mencionado que, debido a la cercanía de la frontera y el aumento en los niveles de violencia, existe una "psicosis" entre la gente con recursos económicos: no quieren invertir en Carchi e Imbabura; más bien buscan oportunidades en Quito. También hay problemas de mercado: los precios de los cultivos de exportación no-tradicionales son muy inestables: fluctúan de un año a otro. Finalmente, algunos productores muestran dificultades para contratar trabajadores adecuados, en tanto los cultivos no-tradicionales necesitan una mano de obra estable y disciplinada, con mucho sentido de responsabilidad, mientras los procesos de migración y desplazamiento están creando una mano de obra flotante. Por supuesto, no es solamente una mano de obra flotante sino, debido a su condi-

ción desplazada, es una mano de obra sumamente barata. Como consecuencia, el jornal de un trabajador agrícola en Carchi e Imbabura disminuye debido a la presencia de los desplazados y emigrantes colombianos. En Ibarra, en el 2005, los colombianos estaban dispuestos a trabajar por \$3-5 diarios, mientras los ecuatorianos pedían de \$6-8. En Carchi, en el 2003, a un trabajador de hacienda se le pagaba un jornal de \$5. Para el 2005, se paga solamente \$3.

El comercio, otro sector importante de la economía local, también ha experimentado varias dificultades. El comercio local con Colombia tiene dificultades, principalmente debido a la dolarización. El rubro principal en este comercio fue ropa fabricada por las pequeñas y medianas empresas de Quito y Atuntaqui. Sin embargo, muchas de estas empresas han quebrado debido a la dolarización y los altos intereses bancarios. Por otro lado, las grandes fábricas que han podido salir adelante, generalmente tienen sus propios canales de distribución. Según un representante de la Asociación de Pequeños Comerciantes de Tulcán, entre 1999 y 2005, las ventas de ropa a Colombia bajaron por lo menos en un 50 por ciento, debido principalmente a estos factores. Otro factor, según el mismo entrevistado, fue la introducción del libre comercio: la ropa que producen las pequeñas y medianas empresas no puede competir, en términos de precios, con la ropa que traen del Perú, China, y Corea del Sur.

La situación de pequeños comerciantes que venden productos en los mercados locales presenta índices de deterioro, debido a la competencia con sus colegas colombianos, los cuales, al

parecer, les quitaron muchos de sus clientes. Adicionalmente, muchos dueños de negocios en Ibarra prefieren a empleados colombianos, quienes a más de trabajar por una remuneración más baja, son “más amables con los clientes” y están dispuestos a hacer cualquier tipo de ocupación. La competencia con la mano de obra colombiana dificulta la sobrevivencia económica de los sectores pobres de la ciudad y del campo, creando una reacción negativa contra los desplazados colombianos.

Las dificultades económicas se complementan por problemas sociales. En muchos casos, la situación de pobreza afecta, en una forma desproporcionada, a las mujeres, niños y jóvenes, que, juntos constituyen una mayoría tanto de la población desplazada como de la local. Entre el 20 y el 25 por ciento de los hogares en Carchi e Imbabura están dirigidos por mujeres jefas de hogar; éstos generalmente tienen ingresos más bajos que los dirigidos por hombres. Además, mujeres y niños/as frecuentemente son víctimas de la violencia doméstica. En el 2001, solo en el Cantón Ibarra hubo más de mil denuncias de violencia doméstica. Sería lógico esperar que, en una situación de crisis económica y con la proximidad del conflicto armado, la violencia doméstica haya ido en aumento. Sin embargo, entre 2001 y 2003, el número de denuncias recibidas por las Comisarías de la Mujer y la Familia bajó en Imbabura y ha bajado o mantenido estable en Carchi (Dirección Nacional de Género, citado en Camacho 2004: 33). Según nuestras entrevistadas, una explicación optimista es que las relaciones de género, de hecho, están cambiando. La otra

explicación, pesimista, es que una ola de denuncias después de la creación de las Comisarías provocó una ola de separaciones y divorcios, lo que hizo a muchas mujeres admitir la violencia con el objetivo de preservar su familia.

El posible aumento de la violencia familiar no reportada a las Comisarías de la Mujer y la Familia es la indicación de una situación cada vez más difícil que viven las mujeres y sus hijos/as, una situación que encuentra un reflejo en lo que podríamos calificar como una crisis de la juventud (Korovkin y Ortíz, por publicar). En parte, esta crisis está relacionada con la falta de empleo, que afecta a los/las jóvenes mucho más que a los adultos. Pero también tiene que ver con la desintegración de las redes familiares debido a la migración nacional e internacional. Según nuestros entrevistados, en algunos colegios de Tulcán, la proporción de alumnos con padres y madres ausentes (generalmente trabajando en España) llega al 20-30 por ciento. La ausencia de los padres afecta el rendimiento escolar y genera graves problemas afectivos y psicológicos entre los hijos. A eso hay que añadir las insuficiencias del sistema educativo: el currículo escolar generalmente caduco, mientras la mayoría de los profesores tienen una formación antigua y en muchos casos no pueden responder, en una forma adecuada, a los problemas y necesidades de sus alumnos. Estos, y posiblemente otros factores generan una situación crítica, que se manifiesta en el aumento del alcoholismo, drogadicción y delincuencia juvenil.

Desde hace tres o cuatro años, en Ibarra se han abierto nuevos bares y discotecas. mientras la calle principal de

Ibarra se convirtió, durante los fines de semana, en lo que se llegó a conocer como "la cantina de Ibarra." Muchos de los nuevos bares y discotecas actúan como una red de explotación sexual. Ibarra siempre ha tenido prostíbulos registrados, donde las trabajadoras sexuales pasan, periódicamente por los chequeos médicos. Pero los nuevos bares y discotecas no están controlados por las autoridades de salud, lo que puede ser una de las razones detrás de la reciente aparición del SIDA. Una gran parte, o incluso la mayoría, de las mujeres empleadas en los nuevos bares y discotecas son jóvenes colombianas, en muchos casos menores de 18 años, las que están obligadas a recurrir al trabajo sexual como una forma de ganarse la vida. Por otro lado, los dueños y la gran mayoría de los clientes son ecuatorianos, con los jóvenes menores de 18 años como parte de la clientela.

Los niveles del crimen violento, generalmente organizado, también se ha aumentado. Aunque la percepción popular es que este aumento se debe a la presencia de la población colombiana, es probable que los factores domésticos tienen un peso más grande. De hecho, a nivel nacional, solamente el 3% de las personas detenidas por la Policía Judicial son colombianos (Dirección Nacional de la Policía Judicial, citada en Camacho 2004: 64). Algunos de nuestros entrevistados, especializados en cuestiones del orden público, identificaron la falta de trabajo y la migración a España como las causas nacionales del aumento en los niveles de violencia, cuyos efectos están aumentando por las "fronteras abiertas" con Colombia. En Carchi, existen secuestros de hacendados y

extorsiones a través de cartas ("vacunas") formas de violencia nuevas para esta provincia. A primera vista, parecen protagonizados por grupos armados de origen colombiano pero, según representantes de la Jefatura de Policía, entrevistados por Comunidec, lo más probable es que son delincuentes comunes, los cuales se presentan como miembros de grupos armados para darse más peso (Comunidec 2004). También se han aumentado los asaltos en carreteras y robos de vehículos. El tráfico de cocaína y precursores es otro problema (Rivera Vélez 2005). Mientras los carteles de cocaína son de origen colombiano, no sería sorprendente que la situación de pobreza y la desintegración de las redes de apoyo social obliguen a varios ecuatorianos, y especialmente a los y las jóvenes, a participar, en un papel subordinado, en el ilícito comercio transnacional. Todos estos cambios han transformado la cotidianidad en las provincias del norte, generando un ambiente de inseguridad y temor ante el aumento del crimen y violencia (OIPAZ 2002). Este ambiente es especialmente pronunciado en el caso de Sucumbíos, siendo perceptible en Carchi e Imbabura.

Como en el caso del desplazamiento poblacional, el deterioro económico y social en las provincias del norte ha causado respuestas no solamente locales o nacionales, sino también internacionales. La Evaluación Común de País por el Sistema de las Naciones Unidas señala que el principal desafío en Ecuador es remediar las condiciones de exclusión e inequidad que enfrenta la mayor parte de la población, y llama a una mayor coordinación de esfuerzos entre las organizaciones internacionales, el

gobierno ecuatoriano y la sociedad civil (Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador 2004). La posibilidad de una regionalización del conflicto colombiano dio a estas recomendaciones un tono de emergencia. Pero su implementación se ha topado con varios problemas.

Para agilizar el desarrollo económico y social en las provincias del norte, Carchi e Imbabura incluidos, el gobierno ecuatoriano ha creado una agencia especializada, Unidad de Desarrollo de la Zona Norte de Ecuador (UDENOR). Esta iniciativa fue apoyada por el Grupo Consultivo de Bruselas, compuesto por un gran número donantes internacionales, entre ellos BID, CAF, ONU y los gobiernos de Alemania, Bélgica, Chile, España, EEUU, Italia y Japón, con el gobierno de Canadá como observador. En el 2001, el Grupo Consultivo prometió entregar a UDENOR \$266 millones para trabajos de desarrollo en tres áreas: (i) mejoramiento de la infraestructura: caminos, sistemas de riego, obras de saneamiento; (ii) desarrollo productivo, especialmente los cultivos de exportación no-tradicionales (brócoli, espárrago, etc.); (iii) desarrollo social (salud, educación) (UDENOR 2005).

UDENOR, sin embargo, nació como una iniciativa burocrática, manejada políticamente desde Quito. Además, de los \$266 millones prometidos, relativamente pocos lograron concretarse, en parte debido a los problemas surgidos durante la implementación de sus primeros proyectos. Como resultado, UDENOR no siempre ha cumplido con las expectativas generadas por su creación (El Comercio 20/07/05). Pero tal vez estas expectativas eran exageradas, desde el principio. El desarrollo econó-

mico y social es una tarea del gobierno nacional, una tarea postergada en el caso de Ecuador, debido al enfoque sobre la exportación del petróleo y el pago de la deuda externa (Salgado 2004; Korovkin y Ortíz, próximo a publicarse). Difícilmente se puede esperar que UDENOR, con sus proyectos puntuales, pueda tener el mismo impacto que el gobierno nacional.

En la práctica, UDENOR trabaja principalmente con USAID, siguiendo las pautas del desarrollo local, creadas por USAID para el caso de Colombia (Andrade 2004: 86). El énfasis está en obras de infraestructura, implementadas por medio de la colaboración con el sector privado y otras organizaciones internacionales. En Carchi, UDENOR, USAID y OIM (Organización Mundial para las Migraciones, una organización inter-gubernamental con sede en Ginebra) han trabajado principalmente en las obras de riego y saneamiento, mejoras en carreteras y caminos (e.g., la vía Tulcán-El Chical), arreglo de puentes e intentos de promoción para la producción de brócoli y aguacate. Hasta el momento, estas iniciativas han tenido pocos efectos en términos del desarrollo productivo y creación de empleo. Como se ha mencionado antes, la falta de infraestructura no es el único cuello de botella; los problemas de crédito y mercado son igualmente importantes. Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones, UDENOR y sus contrapartes tienen poca capacidad o deseo para abordar estos problemas.

Hay organizaciones locales que desarrollan, con bastante éxito, actividades productivas en las comunidades rurales. FEPP, por ejemplo, tiene una am-

plia experiencia en el manejo de empresas productivas, como Quesinor y Cuisinor. CACMU (Fundación Cooperación y Acción Comunitaria) y PRODEPINE han trabajado con microcrédito: CACMU como una cooperativa de ahorro y crédito con financiamiento nacional y PRODEPINE en tanto iniciativa de organizaciones indígenas apoyadas por el Banco Mundial. Tanto CACMU como PRODEPINE han tenido sus problemas y limitaciones, pero sus experiencias podrían ser útiles para el desarrollo de proyectos de microcrédito por parte de UDENOR. Sin embargo, hay poca relación entre las organizaciones locales involucradas en las iniciativas de desarrollo productivo y las iniciativas de UDENOR.

Lo mismo sucede en otras áreas de desarrollo. Carchi e Imbabura han vivido procesos de descentralización administrativa, especialmente exitosa en el caso del cantón Cotacachi, donde el gobierno municipal con el apoyo de UNORCAC (Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi) dinamiza procesos de desarrollo local. Hay ejemplos de co-participación de varias organizaciones en el manejo de los recursos naturales, como es el caso de los cantones Espejo, Mira y Bolívar, donde los municipios, organizaciones campesinas y ONGs manejan la microcuenca del Ángel. Sin embargo, estas iniciativas de administración participativa tienen poca relación con programas de UDENOR. Eso no quiere decir que UDENOR y sus contrapartes trabajen por fuera del consenso de las comunidades beneficiarias. OIM, por ejemplo, organiza asambleas en las comunidades para hablar de sus proyectos de saneamiento, firma contra-

tos con las autoridades comunitarias y organiza las juntas de agua en las áreas donde está construyendo sus obras. Aunque no está claro hasta que punto estos arreglos con las comunidades pueden considerarse como un ejemplo de desarrollo participativo.

Las mismas preguntas surgen en el caso de la lucha contra el crimen y la violencia. Varias organizaciones sociales tratan de abordar estos problemas en sus respectivas áreas de trabajo. Así los grupos de mujeres en Ibarra a través de los talleres de género y apoyo a la Comisaría de la Mujer y la Familia. Los grupos de derechos humanos, imparten talleres en los colegios de Ibarra sobre los derechos de niños y jóvenes, mientras la Casa de la Juventud en Tulcán, creada por el Programa del Muchacho Trabajador y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, desarrolla actividades artísticas, organiza festivales de cine y ofrece cursos de informática, formación ciudadana y desarrollo de la personalidad para los adolescentes y jóvenes de esta ciudad. La policía provincial promueve una serie de iniciativas propias, dentro del modelo de la policía comunitaria proveniente de España y Colombia, por lo que, en Tulcán e Ibarra, los antiguos PAIs (puestos de auxilio inmediato) se han convertido en UPCs (unidades de policía comunitaria) que sirven como centros barriales de acción cívica-policial. En Ibarra se formaron brigadas barriales dentro de las asociaciones barriales, con los objetivos de recoger información que pueda servir en la lucha contra la delincuencia y prevenir que los moradores utilicen la justicia por mano propia. En Tulcán, las UPCs aplicaron un censo barrial incentivando

la creación de directivas barriales. En ambas provincias, la policía ha organizado mingas comunitarias de limpieza y auspiciado actividades culturales para los jóvenes y los niños (fiestas de barrio, campeonatos deportivos, cursos vacacionales, campamentos de verano). Esta mayor preocupación, por parte de la policía, por la seguridad ciudadana encuentra respuestas positivas entre varios sectores de la población. Pero genera preguntas tanto sobre los límites de la acción policial como sobre las relaciones entre la policía y las organizaciones sociales. Serán relaciones equitativas y de cooperación, o más bien serán relaciones de control y cooptación?

Conclusiones

Partimos de la premisa que el desplazamiento poblacional desde las zonas de conflicto armado puede aumentar los niveles de violencia e inestabilidad social en las áreas receptoras, disminuyendo los niveles de la seguridad humana. A primera vista, parece que esto ha sucedido en Carchi e Imbabura. Sin embargo, pensamos que esta "desestabilización" es, en gran parte, producto de la crisis económica y social que estas provincias han vivido independientemente del Plan Colombia. Más bien, el desplazamiento de la población colombiana ha multiplicado los graves problemas de origen doméstico. La falta de empleo, migración y el aumento de la delincuencia juvenil son problemas que Carchi e Imbabura comparten con muchas otras provincias del Ecuador. En gran parte, son consecuencias de las políticas públicas implementadas en las últimas décadas por los go-

biernos nacionales, y especialmente de la política de dolarización. En otras palabras, la llegada de la población desplazada a Carchi e Imbabura ha actuado como un catalizador de los procesos de desestabilización, siendo la pobreza y la crisis social de origen local los factores fundamentales.

En estos casos, la estrategia de la seguridad del estado o incluso la estrategia de la seguridad humana en su versión humanitaria/internacional son claramente insuficientes e incluso pueden ser contra-productivos. No es factible "cerrar" la frontera con Colombia. Tampoco es posible segregar a una minoría de los refugiados oficialmente reconocidos por la mayoría de colombianos que viven en forma precaria, sin documentación. Lo que se necesita es una estrategia de seguridad humana a nivel nacional, implementada como parte de las políticas públicas de desarrollo local. En otras palabras, el humanitarismo internacionalista debería conjugarse con la visión del PNUD que pone énfasis sobre formas de desarrollo orientadas hacia las necesidades locales y protagonizadas por los actores sociales.

Muchos actores internacionales apoyan estas ideas. Sin embargo, cuando estos lineamientos son puestos en práctica, a muchas de éstas se implementan de tal forma que no toman en cuenta o contradicen las realidades y percepciones locales. La presencia de una población colombiana indocumentada y desatendida en el territorio ecuatoriano es una clara manifestación del desencuentro entre las iniciativas humanitarias internacionales y la dinámica del mundo local. De la misma manera, la inversión en la infraestructura de ca-

minos y riego, apoyada por las agencias internacionales como punta de lanza del desarrollo local, no necesariamente resulta en el desarrollo productivo y la creación del empleo. En el área social, el enfoque sobre la salud y educación, en forma de donación de equipos, por más bienvenida que sea, no permite prestar la suficiente atención a la problemática más compleja y más urgente de la crisis que vive la juventud. En cuanto a la creación de la policía comunitaria, parece indispensable mejorar la lucha contra el crimen y la delincuencia, pero también genera una cierta tensión entre la lógica participativa de las organizaciones sociales, por un lado, y la lógica vertical de las fuerzas del orden, por el otro.

Generalmente se reconoce que la participación de los actores locales en las iniciativas humanitarias y de desarrollo local es un requisito indispensable para el éxito de estas iniciativas. En el caso de Ecuador, estos actores están representados por los gobiernos locales, fortalecidos por los procesos de descentralización, y por las organizaciones sociales, con su larga trayectoria de trabajo de base. Pero, por el momento, existe una cierta brecha entre el mundo de agencias internacionales, por un lado, y el mundo de gobiernos locales y organizaciones sociales, por el otro. Hay iniciativas, como la de FAS de Ibarra, para cubrir esta brecha, pero queda mucho todavía por hacer en este sentido.

Bibliografía

- ACNUR
2004 *Reporte 2004, ACNUR Ecuador*. Quito: ACNUR.
- Axworthy, Lloyd
2003 *Navigating a New World: Canada's Global Future*. Toronto: Vintage Canada.
- Buzan, Barry
1991 *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Col-war Era*, 2nd ed. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Buzan, Barry, Waever, Ole, and de Wilde, Jaap (eds.)
1998 *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner.
- Camacho Zambrano, Gloria
2005 *Mujeres al Borde: Refugiadas Colombianas en el Ecuador*. Quito: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer - IFEM.
- El Comercio, 20/07/05, "UDENOR". FLACSO
2004 *Memoria del Proyecto "Política Pública y Seguridad Ciudadana"*. Quito: FLACSO-Fundación Esquel.
- Gottwald, Martin
2004 "Protecting Colombian Refugees in the Andean Region: The Fight against Invisibility," *International Journal of Refugees*, 16 (4), pp.517-546.
- Gobierno Provincial de Carchi
2005 *Diagnóstico Provincia del Carchi*. Tulcán: USE-GPS-SENPLADES.
- Gobierno Provincial de Imbabura
2002 *Plan de Desarrollo Estratégico, 2002/2015*. Ibarra: Gobierno Provincial de Imbabura.
- King, Gary, and Christopher Murray
2002 "Rethinking Human Security," *Political Science Quarterly* 116 (4), 585-610.
- Korovkin, Tanya, y Ortiz, Pablo
(próximo a publicarse). "Resource-Driven Growth and (Un) Sustainable Development: The Case of Ecuador."
- Larrea Maldonado, Carlos
2005 "Dolarización, Exportaciones y Pobreza en Ecuador," en Tanya Korovkin (comp.), *Efectos Sociales de la Globalización: Petróleo, Banano y Flores en Ecuador*. Quito: Abya Yala - CEDIME
- Newman, Edward
2003 "Refugees, International Security, and Human Vulnerability: Introduction and Survey," pp. 3-30, in Edward Newman and Joanne van Selm (eds.), *Refugees and Forced Displacement: International*

- Security, Human Vulnerability, and the State*. New York: United Nations University Press.
- OIPAZ (Observatorio Internacional por la Paz)
 2002 *Testimonios de Frontera: Efectos del Plan Colombia en la Frontera Colombiana-Ecuatoriana*. Quito: OIPAZ.
- Owen, Taylor
 2002 "Body Count Rationale and Methodologies for Measuring Human Security," *Human Security Bulletin* 1 (3).
- París, Roland
 2001 "Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?" *International Security*, 26 (2), 87-102.
- Ramón Valarezo, Galo, and Víctor Hugo Torres Dávila
 2004 *Frontera Norte Ecuatoriana: Desafío de la Gobernabilidad*. Quito: Abya Yala - Comunidec.
- Rivera Velez, Fredy
 2005 "Ecuador: Untangling the Drug War," pp.231-262 in *Drugs and Democracy in Latin America: The Impact of US Policy*, edited by Coletta Youngers and Eileen Rosin, Boulder Co.: Lynne Rienner.
- Schmeidl, Susanne
 2002 "(Human) Security Dilemmas: Long-term Implications of the Afghan Refugee Crisis," *Third World Quarterly* 23 (1), 7-29.
- Schnabel, Albrecht
 2004 "Human Security and Conflict Prevention," pp.109-131 in *Conflict Prevention: From Rhetoric to Reality*, vol. 2, edited by David Carment and Albrecht Schnabel, New York: Lexington Books.
- Sistema de la Naciones Unidas en el Ecuador (SNU)
 2004 *La Frontera Norte del Ecuador: Evaluación y Recomendaciones de la Misión Intragencia del Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador*. Quito: SNU.
- Stoett, Peter
 1999 *Human and Global Security: An Exploration of Terms*. Toronto: Toronto University Press.
- Suhrke, Astri
 2003 "Human Security and the Protection of Refugees," pp.93-108 in Edward Newman and Joanne van Selm (eds.), *Refugees and Forced Displacement: International Security, Human Vulnerability, and the State*. New York: United Nations University Press.
- Thomas, Caroline
 2002 "Global Governance and Human Security," pp. 113-131 in *Global Governance: Critical Perspectives*, edited by Rorden Wilkinson and Steve Hugh. London: Routledge.
- UDENOR
 2005 *Plan Operativo Anual, POA*. Quito: UDENOR.
- Waever, Ole, et al.
 1993 *Identity, Migration, and the New Security Agenda in Europe*. New York: St. Martin's Press.

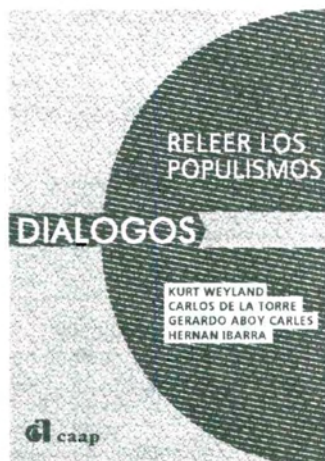
RELEER LOS POPULISMOS

Kurt Weyland

Carlos de la Torre

Gerardo Aboy Carles

Hernan Ibarra



Esta edición de la serie Diálogos intenta desentrañar esos "Vacíos Políticos", en los que emergen los populismos y la apropiación que el líder populista hace de estos escenarios, así como contribuir al esclarecimiento de un concepto que según A. Moreano, "A transitado con éxito desde las ciencias sociales hacia el sentido común".

A decir de muchos, el populismo es un fantasma que recorre América Latina, con nuevas formas y en otros contextos a los estudios clásicos sobre este fenómeno, lo que permitiría distinguir a un viejo populismo de un actual Neo-Populismo. En todo caso estamos frente a un concepto ambiguo que parece haber conspirado para podernos explicar mejor momentos cruciales de la historia política.